

PERIODO
PRESIDENCIAL.
002568
ARCHIVO

INFORME DE ANALISIS

(AL 15 DE NOVIEMBRE DE 1991)

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

A. ANALISIS POLITICO

En el informe anterior se aludió al giro en la política del Partido Comunista y el impacto que puede tener en el desarrollo de escenarios de agitación callejera como el vivido la semana que pasó a raíz de la huelga de hambre de presos políticos.

Incluso si el cuadro de agitación callejera no se repite, la conformación de un **escenario de dos oposiciones (de derecha y de izquierda)** puede tornar crecientemente difícil para los distintos actores políticos el mantener conductas orientadas por una alta racionalidad, rasgo que ha caracterizado al proceso político hasta ahora y que explica en gran medida tanto el éxito del Gobierno como los avances logrados en términos políticos, económicos y sociales.

Hay que destacar que el tipo de estrategias que comienzan a ser puestas en ejecución desde ambas oposiciones ("oposición democrática de izquierda" en el caso del PC, denuncia de una "contrarrevolución silenciosa" por parte de la UDI, paso de la democracia de los acuerdos a la "democracia de las alternativas" en el caso de RN), son estrategias que encierran una alta potencialidad de producir efectos no previstos, que podrían escapar al control de los actores (comunismo y partidos de derecha) con consecuencias perniciosas para la buena marcha de la política y la economía. En síntesis, son estrategias de endurecimiento, con potencialidades no desdeñables de tornar el proceso político crecientemente menos racional.

En esas condiciones, las exigencias de racionalidad que recaen en el Gobierno son, si cabe, todavía mayores.

La evaluación de la reunión que el Presidente sostuvo, a fines de octubre, con jefes de bancada y de partidos de la Concertación es muy positiva y no vale la pena abundar sobre la misma. Sin embargo, la lectura que la derecha, y sobre todo RN, parece haber hecho de tal reunión es que allí se sancionó una política destinada a procurar imponer el programa de Gobierno e impulsar reformas sin considerar la cuestión de los consensos, o aún efectuando un giro hacia una nueva línea estratégica agresiva, que implica justamente buscar la confrontación, abandonando la idea de consenso y negociación. Todo ello en consonancia con el anuncio gubernamental del fin de la transición y el clima preelectoral que ya se está viviendo.

La posición de RN ya había sido fijada en su Consejo General de Osorno (8 de septiembre) donde anunció el fin de la democracia de los acuerdos y el paso a una estrategia que privilegiaba la "democracia de las alternativas". Esta posición, unida a los antecedentes recién señalados, claramente refuerza un cuadro de posible endurecimiento, que puede afectar el grado de racionalidad del proceso político.

Hay otros hechos que contribuyen a configurar ese clima de endurecimiento. Por ejemplo, "El Mercurio" habló de "La guerrilla Gobierno-Renovación" y la describió con detalle el domingo 10 de noviembre; la utilización que se ha hecho de la crítica presidencial al Tribunal Constitucional; el estrecho margen con que fue aprobada la designación del nuevo consejero del Banco Central. Todos estos fenómenos, pueden constituirse en señales percibidas como expresión de una voluntad que implica recoger el guante arrojado por RN en Osorno sobre la cancelación de la "democracia de los acuerdos".

La experiencia acumulada en estos veinte meses demuestra que la clase de racionalidad política que ha orientado la política consensualista del Gobierno no sólo representa ventajas para él mismo y la Concertación, sino sobre todo para el país. Hay quienes piensan que ella puede tener el efecto secundario de no concitar el tipo de entusiasmos requeridos por la campaña electoral que se avecina, pero aún si se acepta esa tesis, por lo demás discutible, ello resultaría muy secundario en comparación con la racionalidad que esa estrategia le imprime al juego político y los efectos positivos generales que trae consigo.

La lección de la experiencia es que debe privilegiarse una alta racionalidad política, en cuanto es una exigencia ineludible de la consolidación democrática, por sobre posturas agresivas que pueden comenzar a trabar los avances, sin perjuicio de que, particularmente de cara a las elecciones, el lenguaje experimente un cierto giro hacia un estilo más incisivo.

Es natural que la perspectiva de las elecciones municipales disponga a los actores políticos a un cierto tono más beligerante. Pero hay que estar conscientes de que también en este terreno, al igual que en el económico, el Gobierno camina por un "estrecho desfiladero".

Por ejemplo, sería erróneo pensar que el clima de confianza económica logrado, y en el que se ha invertido sistemáticamente desde antes de asumir el Gobierno, es un intangible absolutamente afianzado, de modo tal que es posible despreocuparse de los potenciales efectos negativos que sobre él pueda generar una atmósfera de creciente endurecimiento o polarización en el plano político. La visión de un proceso legislativo paralizado en virtud del despliegue de políticas abierta y sistemáticamente confrontacionales no sólo podría perjudicar la confianza y expectativas positivas de los agentes económicos, sino también trabar medidas cuya aprobación es necesaria tanto para estabilizar reglas del juego como para agilizar la economía. Si esto último acontece, estaríamos dando bases objetivas a la acusación de una contrarrevolución silenciosa en marcha.

Adicionalmente, todavía necesitamos de colaboración en el plano político para sacar adelante las reformas ya en trámite parlamentario y otras vitales para la Concertación, como la electoral, que se presentará sólo en los próximos meses.

En conclusión, parece necesario identificar una fórmula que, permitiendo satisfacer las exigencias de un lenguaje más incisivo, adecuado a los requerimientos de la campaña electoral, a la vez mantenga la alta racionalidad que ha caracterizado la política gubernamental y que es una de las claves de su éxito.

B. INFORME ECONOMICO

Durante la semana que termina, el principal tema de debate han sido las expectativas inflacionarias y la compatibilidad entre las políticas cambiaria, monetaria y fiscal. Esta polémica, aparentemente centrada en elementos coyunturales, tiene una gran incidencia en la evolución futura de la economía chilena, ya que las señales que se emitan en los próximos meses serán claves en las decisiones de inversión y en las presiones inflacionarias para 1992.

La inflación de octubre (2,9%) y la primera señal de IPC para noviembre entregada por el Banco Central (1,4%) permiten estimar en 17,7% la inflación de los primeros once meses del año. Para la mayoría de los agentes económicos, esta cifra significaría que durante 1991 la inflación superaría el 18%. A pesar de que es probable que la caída en los precios de algunos productos agrícolas tenga efectos favorables sobre el IPC, es muy difícil que la inflación de diciembre no supere el 0,3%.

No parece correcto sacralizar una cifra específica de inflación (18%), ya que sólo se trató de una estimación a principios de año. Sin embargo, el tema inflacionario es una preocupación que no debe monospreciarse, especialmente porque hay elementos propios de la actual situación macroeconómica que dificultan su control.

Las medidas adoptadas por el Banco Central la semana pasada, consistentes en reducir la tasa de interés de sus pagarés reajustables y en utilizar una menor tasa de inflación externa para determinar el tipo de cambio acuerdo (lo cual equivale a una pequeña devaluación del peso), tuvieron por objetivo desalentar la venida de capitales de corto plazo deseosos de aprovechar la diferencial de tasas de interés que se iba a originar, a causa de la reducción de las tasas norteamericanas. Si no se aplicaban esas medidas correctivas, la afluencia de divisas habría presionado a la baja del tipo de cambio, obligando al Banco Central a comprar divisas y emitir pesos, con el efecto inflacionario que ello significa.

La mayoría de los analistas coincide en que esas medidas, si bien sirvieron para controlar la emergencia, sólo retrotraen la situación a la existente antes de la rebaja de las tasas de interés estadounidenses, pero no consiguen resolver el problema permanente, cual es el exceso de oferta de dólares que existe en esta economía. Las medidas de junio buscaban resolver este impasse, pero todavía la reactivación de las importaciones no ha sido suficiente para contrarrestar la abundancia de divisas, la cual se espera que crezca a causa de la afluencia de turistas en la temporada veraniega y la llegada de nuevos recursos de inversión.

A estas alturas, todas las opciones de las cuales dispone la autoridad económica son costosas. La primera es continuar con la situación vigente, confiando en que la reactivación estimulará un crecimiento de las importaciones -de bienes de capital, intermedios y de consumo- y de ese modo el tipo de cambio de mercado se elevará,

reduciéndose las presiones sobre el Banco Central para que compre divisas al precio oficial.

Sin embargo, esta opción es limitada, porque de todas maneras las cuentas externas de Chile seguirán mostrando superávit, por lo cual la abundancia de divisas seguirá incrementándose. Por otra parte, la actual operación deficitaria del Banco Central no puede ser sostenida eternamente.

Si se reconoce que tarde o temprano deberán adoptarse nuevas medidas tendientes a resolver el problema monetario generado por la política cambiaria, hay dos caminos, ambos con costos y beneficios.

Sectores de oposición han insistido en que se incremente el ahorro público o se vendan empresas que aún pertenecen al Estado, y con los recursos obtenidos se prepague la deuda del Gobierno con el Banco Central. De esta manera, el instituto emisor contaría con el respaldo financiero necesario para continuar su actual operación. Como es obvio, esta vía presenta severos obstáculos políticos, ya que es prácticamente imposible reducir el gasto público o profundizar la política de privatizaciones. Por otra parte, tampoco se estaría resolviendo el problema de fondo.

Un segundo camino es enfrentar la coyuntura a través del sector externo. Hay aquí al menos tres planteamientos: estimular la salida de capitales, bajar los aranceles de importación y revaluar el peso.

En cuanto a permitir de manera más expedita la salida de recursos al exterior, no parece ser una alternativa muy potente, ya que probablemente la mayor liberalidad para salir estimule la entrada de nuevas inversiones hacia Chile. Además, por radicales que sean las medidas, las dificultades que implica la inversión en el exterior hacen poco plausible una pronta solución al exceso de divisas.

La rebaja de aranceles también tiene inconvenientes, ya que genera una menor recaudación tributaria (y, por lo tanto, menos recursos para el gasto público) que difícilmente podría compensarse con incrementos en otros impuestos (el IVA ya es muy alto y se acordó con la oposición no volver a aumentar los impuestos directos). Además, esta medida se adoptó en junio y demostró que su efecto no es inmediato.

La alternativa de reducir el tipo de cambio, ya sea revaluando o permitiendo una flotación más libre del precio de la divisa, también tiene sus inconvenientes. En primer lugar, una caída de 10% en el tipo de cambio (estimación del sobreprecio actual) generaría una desvalorización importante de los activos mantenidos en moneda extranjera. En este caso, el Banco Central y Codelco serían los principales afectados. El segundo -y quizás principal- inconveniente de revaluar es el perjuicio que esta medida significaría para los exportadores, ya que sus retornos expresados en pesos se verían disminuidos.

El efecto de este perjuicio podría ser, además de las presiones políticas, un desincentivo a la inversión en sectores exportadores.

Si bien el Gobierno debe mantener su compromiso con el desarrollo del sector exportador, también es cierto que la experiencia de otros países exitosos en esta materia muestra que el tipo de cambio no puede ser la herramienta permanente para estimular las exportaciones. La contradicción entre un tipo de cambio alto y una abundancia estructural de divisas es un fenómeno que prácticamente todos los sectores reconocen.

Es necesario ingresar a una nueva etapa del desarrollo exportador, en que la competitividad internacional se base en mayor productividad y valor agregado. En este sentido, el desarrollo de tecnologías, la capacitación laboral, la inversión en infraestructura y la apertura hacia mercados comunes son caminos que deben profundizarse.

En este tema, los planteamientos que los empresarios y las autoridades del Gobierno realicen en las ENADE '91 serán de gran interés y permitirán evaluar con más antecedentes las responsabilidades recíprocas involucradas en seguir expandiendo la economía, con una inflación inferior a 15% en 1992 y con dinamismo en el sector exportador.